



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA CIVIL

Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
RADICADO: 05360 31 03 002 2019 00125 03
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Asunto: Solicitudes de Aclaración, Corrección y Adición de Sentencia.
Demandantes: FELIPE EDUARDO RESTREPO ECHAVARRÍA y otro.
Demandados: J.H. RESTREPO Y CIA. S.A. y otros.
Extracto: 1. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la profirió, sin que las instituciones de la Aclaración, Corrección y Adición, constituya oportunidad para replantear el litigio.
2. La aclaración procede cuando existan motivos serios de duda, los que no se patentizan en las presentes. Niega aclaración.
3. Al evidenciarse un error puramente aritmético, la sentencia puede ser corregida, pero si ello no se advierte, la decisión será de conformidad. Niega corrección.
4. La adición a la sentencia procede cuando esta omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis, o cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, pero si ello no ocurrió, tal figura se torna improcedente. Niega adición.

ASUNTO A TRATAR

Decide la Sala las solicitudes de corrección, aclaración y adición, que formulan ambas partes, frente a la sentencia proferida por esta Sala de Decisión el día veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023); previas:

CONSIDERACIONES

Como se indicó en la exposición del punto, ambas partes presentaron las anunciadas solicitudes, donde por cuestiones metodológicas primero nos pronunciaremos sobre lo deprecado por la parte actora y

en el mismo acápite presentaremos la motivación del caso, para luego hacer lo propio en relación a lo pedido por la demandada.

Para el efecto, como marco normativo y doctrinal ha de recordarse que ciertamente las sentencias pueden ser aclaradas, corregidas y adicionadas en la forma establecida en el ordenamiento procesal civil, sin que ello constituya un instrumento para replantear el litigio, o en su defecto, para generar una nueva ocasión de análisis y explicación de conceptos ya definidos, pues como de tiempo atrás ha indicado el supuesto normativo pertinente; *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”*¹, de lo que la doctrina indicó:

“Las sentencias judiciales una vez proferidas por el juez agotan la competencia funcional, razón ésta por la cual no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento por el mismo juzgador que las profirió, salvo el caso de que sea procedente la corrección de errores aritméticos o de algunas expresiones, o en la hipótesis de ser necesaria su adición o aclaración. Será procedente la adición del fallo cuando quiera que quien lo profirió no hubiere decidido sobre todos los extremos de la litis, o lo que es lo mismo, hubiere incurrido en una omisión por abstenerse de decidir sobre alguno de los aspectos que deberían haberse incluido en la decisión.” (Corte Constitucional, auto A093 de 2006).

En todo caso, se parte del principio de inmutabilidad de las sentencias².

Para que proceda la aclaración (artículo 285 del C. G. del P.), debe existir una razón objetiva de duda que nuble el entendimiento de la providencia, siempre que tal perplejidad repercuta en la parte resolutive del fallo, o en la motiva cuando de manera directa esta última influya sobre aquella.

La corrección prevista en el artículo 286 del mismo ordenamiento procesal, se prevé cuando se haya incurrido en error puramente

¹ Sobre ello el artículo 285 C. G. del P., reza: *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella...”*.

² Corte Constitucional, auto A303 de 2015

aritmético, ora, ante pifia derivada de omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la providencia o influyan en ella.

En cuanto a la adición, según el artículo 287 Procesal Civil, la misma emerge como remedio en el evento que la sentencia hubiera “*omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento*”. Como particularidad se tiene que tal providencia que adiciona, debe proveerse por sentencia complementaria.

Obviamente los artículos atrás citados también indican que la aclaración, corrección y adición, proceden respecto a autos; sin embargo, aquí nos circunscribimos a la sentencia del 20 de abril hogaño, que fue frente a lo cual se hicieron las respectivas solicitudes.

DE LAS SOLICITUDES DE LA DEMANDANTE:

La primera solicitud de “*complementación*” (sic) -entiéndase adición-, fue presentada así:

“Que se adicione el numeral QUINTO de la parte resolutive del proveído, el que se solicita complementar, ordenándole a la sociedad codemandada “J.H. RESTREPO Y CÍA S.C.A”, hoy J.H RESTREPO Y CIA S.A., que además de cumplir con la obligación que le impuso el susodicho numeral, la de restituirle a la masa sucesoria de JUAN HERNÁN RESTREPO IZAZA 125.315 acciones de las 147.000 del paquete accionario del fallecido socio gestor, le restituya, adicionalmente a esa masa herencial, los frutos; es decir, las utilidades, que produjeron esas acciones desde la muerte del causante y hasta la fecha en que realice ese pago y ello en los términos del artículo 964 del C.C.C por haber sido poseedora de mala fe y teniéndose en la cuenta que “... los frutos que deben ser restituidos tiene que actualizarse desde que se percibieron o debieron producirse hasta cuando se realiza su pago.” SC2217-2021”

Para lo anterior argumentó que independientemente que discrepe del tipo de simulación decretada, debe disponerse las restituciones

mutuas, lo que no se hizo frente a la vencida, pues aparte de dejarse a los demandantes sin ingresos, siendo estos la parte económicamente débil, se les ordena restituir la totalidad de lo que recibieron en los últimos diez años del contrato de fideicomiso y la acción privilegiada, montos “*que apenas les permite subsistir*” y no exceden el 12% de las utilidades.

Que con lo dispuesto se premia a la sociedad y a los tres accionistas codemandados, pues a estos se les permite conservar las utilidades que recibieron en ese periodo, que fue el 90% de las producidas por la sociedad, lo que podrán seguir haciéndolo a futuro, pues no se les ordena restituir nada, máxime cuando ellos fueron los únicos beneficiarios con el ardid, sin que se les pueda tratar como terceros extraños a la sociedad.

Para resolver tal solicitud se considera que en este punto la restitución dispuesta en el numeral 5º Resolutivo, fue lo relacionado con el acto que se declarara simulado y según se demandó, esto es el de las acciones que como se saben representan “*una parte alícuota en el capital de una sociedad mercantil*”³, sino, “*Parte alícuota, indivisible y acumulable del capital social de una sociedad anónima que confiere a su titular la condición de socio*”⁴, pues esta al ser representativa los réditos como también las pérdidas se representan en la misma, entonces sus frutos resultan ser el eventual sobre valor, aunque no se puede descartar el desmedro.

Por lo anterior, la restitución ordenada fue específicamente sobre acciones, pues el “*fruto*” de la acción está en la acción en sí misma, por lo que en tal sentido la adición resulta improcedente, coligiéndose que en tal aspecto nada de lo que debía resolverse dejó de hacerse.

³ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Edición Tricentenario.

⁴ Real Academia Española, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

Sobre la “*SEGUNDA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN*”, de la que se indicó “*que se decreten las consecuentes compensaciones*”, no hubo ninguna argumentación adicional, por lo que al no advertirse qué fue lo que dejó de decidirse, tal petición no está llamada a ser estimada.

En la “*TERCERA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN*” se pidió que en la parte resolutive de la sentencia de marras, se ordene:

“3.1) Que el 60% de las utilidades producidas por la sociedad en el periodo de seis (6) años, el comprendido entre el 12 de abril del 2007, fecha del celebración del simulado contrato de cesión de acciones y el día 27 de mayo del 2013, fecha de la muerte del socio gestor, **deben distribuirse**, entre los accionistas, así: a) El 60%, hoy 51%, de esas utilidades, debieron haber engrosado el patrimonio del socio gestor y el 40% restante, en principio, debe engrosar el patrimonio de los herederos demandados como únicos titulares de ese porcentaje del capital, para esas calendas, aunque esto es relativo y,

“3.2) Que El 60%, hoy 51%, de las utilidades producidas por la sociedad desde el día 28 de mayo del 2013, desde el día siguiente al de la muerte del socio gestor y las demás que se causen en lo porvenir, **deben distribuirse**, así: a) El 60% debe engrosar la masa herencial del fallecido socio gestor y el 40% restante, en principio, debe engrosar el patrimonio de los herederos demandados, incluido uno de mis mandantes (FELIPE EDUARDO) quien es titular de una acción privilegiada que le permite recibir el 10% de las utilidades sociales, que no su legitima rigurosa completa.” (sic). Negrillas fuera del texto.

Pues bien, lo solicitado y relacionado en cómo han de distribuirse entre los socios las utilidades derivadas de los ejercicios empresariales, se escapa de lo que fue objeto de decisión y de la naturaleza del proceso que nos ocupa, ello en la medida que la declaración del negocio jurídico censurado por nulidad relativa, conlleva a restituciones según se deriva de tal decisión, pero lo que no procede es cómo se harán repartos que son propios de procesos liquidatorios, ora de rendiciones de cuentas, cuestiones que aquí son extrañas, por lo que sobre el particular nada hay para adicionar, pues la decisión no conllevaba a hacer repartos de derechos, pues lo mismo, como se dijo, es objeto de otro tipo de trámites judiciales, que se insiste, son diferentes al declarativo en estudio.

En ese sentido, la solicitud de adición no prospera.

En relación a la “*CUARTA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN*” y en lo que toca con el numeral SEXTO resolutivo, se pide que se disponga “*en equidad o de buen derecho*”, en el sentido que los demandantes mientras reciban las acciones que les correspondan y estén recibiendo sus dividendos, puedan seguir recibiendo los beneficios derivados del fidecomiso y de la acción privilegiada, ello considerando que la sociedad es la fuente de ingresos de demandantes y demandados.

Pues bien, lo reclamado no era un punto que debía de ser resuelto en la sentencia, sino, que hace referencia a la ejecución de la misma, por lo que al ser ajeno a la institución de la adición, no está llamado a ser acogido.

A lo anterior se suma que el objetivo de la sentencia de marras no es garantizar la congrua subsistencia de las partes, sino que responde a lo que se demandó, la simulación, donde si ello es así, el asunto se resolvió en lo que era objeto de debate, sin que la Sala tuviera que hacer consideraciones adicionales o extraprocesales.

La ejecución de la sentencia en términos temporales, es un asunto posterior a la ejecutoria de tal providencia, por lo que a esta altura no nos podemos pronunciar ya que resultaría extemporáneo por anticipado, al igual que tampoco correspondía que en el fallo se resolviera sobre aspectos sucesorales, pues a lo mismo lo gobierna lo que se desarrolle en el correspondiente proceso de sucesión según la vía que dispongan las partes.

En la solicitud de adición en referencia también se indica que en la masa de bienes de la sociedad deben incluirse *“las propiedades que se han traspasado a nombre de los demandados y / o de sus hijos y a terceros luego de la muerte de Hernán Restrepo, con lo que se viene esquilmando el patrimonio social, en perjuicio de mis mandantes.”*; pero resulta que ello no fue objeto del proceso, sino, específicamente lo que se refiere a la transferencia o cesión de acciones, que efectivamente fue lo solucionado, por lo que no podemos pronunciarnos sobre otros negocios jurídicos, pues se itera, lo que se resolvió fue sobre el componente accionario, donde el manejo de la sociedad es asunto ajeno al proceso, por lo que en ese sentido nada hay que adicionar.

Igualmente, y también se recalca, el presente no es un proceso de rendición de cuentas, por lo que la Sala no debía disponer nada sobre el particular, lo que incluye la destinación que se le diera a las utilidades sociales durante el ejercicio, pues lo mismo a esta altura es una conjetura ya que no fue objeto del proceso, como tampoco establecer eventuales pérdidas que se derivaran de la actividad empresarial.

Adentrándonos en la denominada “QUINTA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN”, la misma fue presentada así:

“Teniéndose en la cuenta que el propósito de la simulación no es el de dañar sino el de engañar, al decir del doctor Miguel Moreno Jaramillo y que ambas partes contratantes fueron representadas en el simulado contrato de cesión de acciones por uno de los autores de ardid, declárese que el ardid censurado no solo es atribuible a JUAN HERNÁN RESTREPO ISAZA al fallecido socio gestor únicamente sino igualmente a “J.H. RESTREPO Y CÍA S.C.A”, hoy J.H RESTREPO Y CIA S.A., a la sociedad codemandada, persona jurídica que no puede hacerse aparecer, en contra de las evidencias como una contratante de la mejor buena fe ostensible, pues es indiscutible que sirvió de caletera de esas acciones en su reserva, pues ningún beneficio recibió esa persona jurídica como supuesta donataria del susodicho contrato simulado de cesión y adicionalmente a las acciones maliciosas de JUAN LUIS RESTREPO ECHAVARRÍA, GLORIA MARÍA RESTREPO ECHAVARRÍA y ANDRÉS RESTREPO ECHAVARRÍA los codemandados, los grandes promotores y beneficiarios de ese teatro contractual y por las razones en

todos mis escritos consignadas, como que fueron ellos quienes autorizaron la muy cuestionada cesión.”.

En lo anterior no se presenta ninguna solicitud de adición, pues no se dice qué se echa de menos en el decisorio, donde como la Sala tampoco la advierte, la decisión será de conformidad.

Finalizando las solicitudes de la parte actora, la sexta presentada como *“ACLARACIÓN ARITMÉTICA DE NUMERAL CUARTO DE LA PARTE RESOLUTIVA”*, para lo que se señaló que *“El porcentaje de donación aceptado no lo fue en mi criterio del 10 % como allí señala sino del 14.7% (15%) del paquete accionario de 147.000 acciones y de 8.45% de la totalidad del capital de la sociedad codemandada”*, pues bien, recordemos que tal punto decisorio indicó:

“ACEPTAR la donación en el diez por ciento (10%) de las acciones que hiciera JUAN HERNÁN RESTREPO ISAZA (q. e. p. d.), en favor de J.H. RESTREPO Y CÍA S.C.A. (hoy J.H. RESTREPO Y CÍA S.A.), conforme la operación aritmética aludida en el numeral anterior, lo que equivale a VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO (21.685) acciones.”

En primer lugar, lo anterior se enmarcaría en la figura de *“Corrección de errores aritméticos”*, la cual está regulada en el artículo 286 procesal civil; entonces, si en el numeral anterior resolutorio al reseñado, se indicó que la nulidad parcial declarada era de la cesión de ciento cuarenta y siete mil (147.000) acciones, si a ello se le reduce en el diez por ciento (10%), ello en principio da como resultado 132.200, los cuales se obtienen de a 147.000 restarle 14.700, cantidad que dista de las 125.315 acciones referidas en el numeral 4º Resolutorio.

No obstante, esa no era la operación aritmética a realizar, pues como se explicó en la parte motiva de la providencia de marras:

“Cuando se declara la nulidad las cosas han de volver, en lo posible, al estado en que estaban antes del acto apócrifo, según se desprende del artículo 1746 del C.C., por lo que la persona jurídica demandada deberá devolver a la

sucesión de JUAN HERNÁN RESTREPO ISAZA las 147.000 acciones que este le cediera, reducidas en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la negociación.

“Para el efecto se tomará el valor nominal por acción para su momento, esto es \$1.000,00, y como el salario mínimo mensual del momento correspondía a \$433.700,00, que multiplicado por cincuenta (50), da \$21'685.000,00, los que reducidos a acciones de a mil pesos corresponde a 21.685, por las que las a devolver serán 125.315 acciones, pero considerando las que existían al 2 de abril de 2007 y en proporción a la totalidad de las acciones que en ese momento se habían expedido.

“¿Y por qué la Sala en el anterior evento asume el valor nominal y no el intrínseco accionario?, la respuesta es porque en tal transacción no hubo movimiento de dinero ni se pagó lo que correspondía, por eso, lo que primó fue la cesión como tal en lo que correspondía según el coste en libros.”

Es decir, que lo que se tomó como cifra a reducir en la donación, fue el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la negociación, que era lo legalmente previsto y autorizado por lo que las acciones que se podían donar sin insinuación según la operación aritmética eran 21.685, por lo que las a devolver resultan siendo 125.315 acciones, habiendo sido la decisión de conformidad, por lo que en ese punto nada hay que corregir.

DE LAS SOLICITUDES DE LA DEMANDADA:

Comienza la accionada deprecando corregir error aritmético, precisamente en lo mismo que estribó la última solicitud de la actora, esto es en el número de acciones a devolver descontando lo que se aceptó como donación. Para el efecto expresó:

“Como bien puede advertirse, la decisión adoptada por el Tribunal en la parte resolutive, en concordancia con lo explicado en la parte motiva, consistió en aceptar el negocio jurídico que entendió como donación respecto de 21.685 acciones, y declarar la nulidad parcial en relación con 125.315 acciones (para un total de 147.000 acciones objeto del negocio).

“No obstante lo anterior, en la parte resolutive se señaló por error que la donación que se tiene por válida es la equivalente al 10% de las acciones, y aquella respecto de la cual se declara la nulidad es la que excede ese mismo

porcentaje del 10%. Como es apenas evidente, el error del Tribunal consistió en fijar un porcentaje equivocado, pues 21.685 acciones no equivalen al 10% de 147.000 acciones, sino al 14,75%. Así, se equivocó el Tribunal al hacer la correspondiente regla de tres, señalando un porcentaje inferior al que resulta cuando se efectúa la operación aritmética de forma correcta.”.

Como se puede ver, la solicitud en cita es en los mismos términos que la presentada por su contraparte, por lo que en atención al artículo 279 del C. G. del P., en cuanto a que “*las providencias serán motivadas de manera breve y precisa*”, nos remitimos a lo expuesto en lo pertinente anteriormente, adicionando que la explicación de la operación aritmética se dio en la parte motiva.

En este punto se recalca que lo que se descontó de las 147.000 acciones no fue su diez por ciento (10%) propiamente dicho, sino, los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la negociación -convertidos estos en el equivalente accionario-, dando el resultado que se anotó, por lo que al no advertirse pifia aritmética alguna no hay nada que corregir en este sentido, como tampoco para aclarar, pues la explicación, se insiste, quedó debidamente registrada en la parte motiva de la providencia.

También la parte en cita presentó **solicitud de adición o aclaración**, donde después de aludir a la parte motiva de la providencia, indicó:

“... es indispensable que a los demandantes se les ordene restituir a la masa sucesoral, no sólo los dineros y recursos recibidos como consecuencia de los privilegios que les otorgó su padre, sino también la totalidad de los derechos que tienen en su cabeza en virtud de lo que el Tribunal denominó “remedo de sucesión”. Particularmente, en el caso del demandante Hernán Camilo Restrepo Echavarría, debe ordenársele la restitución a la masa herencial de todos los derechos que le corresponden en el fideicomiso constituido en su favor; y frente al demandante Felipe Eduardo Restrepo Echavarría, la orden de restitución debe comprender también la acción privilegiada de la cual hoy es titular.”

Para lo anterior se argumentó que:

“... de no ordenársele al señor Felipe Eduardo Restrepo Echavarría que restituya a la masa sucesoral la acción privilegiada, en el futuro él seguiría recibiendo los beneficios que le reporta ese privilegio; y si no se ordenara al señor Hernán Camilo Restrepo Echavarría devolver a la sucesión los derechos que tiene sobre el fideicomiso, seguiría en adelante percibiendo los réditos que el mismo le reporta. Ambas situaciones serían a todas luces incompatibles con la decisión de la sentencia de segunda instancia...”

Pues bien, si observamos en el numeral 6º decisorio de la sentencia del 20 de abril pasado, en él se dispuso:

“HERNÁN CAMILO RESTREPO ECHAVARRÍA, devolverá a la sucesión de JUAN HERNÁN RESTREPO ISAZA, la totalidad de los dineros que hubiera recibido en virtud del fideicomiso referido en las presentes diligencias. Igualmente, FELIPE EDUARDO RESTREPO ECHAVARRÍA reintegrará a la misma masa sucesoria, la totalidad de los recursos que recibiera en virtud de la acción privilegiada aquí considerada. En uno y otro caso tales devoluciones se actualizarán desde el momento de su recibo al del reintegro, atendiendo para ello el Índice de Precios al Consumidor.”

De lo anterior queda claro que tanto el fideicomiso como la acción privilegiada generaron en uno y otro caso réditos a sus beneficiarios, por lo que se ordenaron las correspondientes devoluciones, ya que los correspondientes actos estaban atados a la cesión de acciones demandada en simulación, por lo que para volver las cosas al Estado anterior y conforme el artículo 1745 del C.C., claro que debían reintegrarse unos recursos.

Sin embargo, como la constitución del fideicomiso propiamente dicho como la acción privilegiada que se dispusiese, no fueron objeto de demanda ni de debate procesal, pues no era dable disponer sus cancelaciones o la devolución de los correspondientes derechos, siendo este un asunto de mera congruencia.

Es decir, si en la demanda no se atacó la constitución del fideicomiso como la generación de la acción privilegiada, pues las mismas conservan existencia, sin que sea dable disponer sobre el particular

pues no fue punto de debate, y lo mismo tampoco está atado a las decisiones que de oficio deben pronunciarse.

En tal sentido, la solicitud de adición en estudio no está llamada a prosperar, ni mucho menos aclarar, pues continuando vigentes el fideicomiso y la acción privilegiada, los mismos han de atacarse con los mecanismos jurídicos que correspondan.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

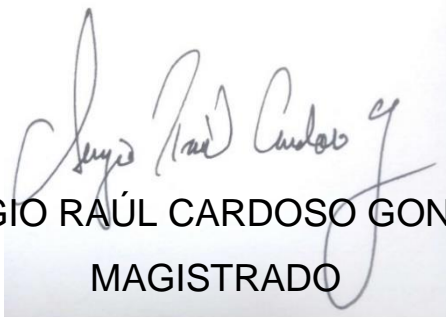
ÚNICO: NEGAR las solicitudes de corrección, aclaración y adición impetradas por ambas partes, respecto a la sentencia de segunda instancia proferida dentro del referenciado y calendada el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), tal como se motivó. Sin condena en costas.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

MAGISTRADO



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
MAGISTRADO
(Con salvamento de voto)